

EL ODIO DE CLASES

El nuevo salario mínimo —seiscientas pesetas— decidido por Decreto-Ley en el último Consejo de Ministros resulta insuficiente, según la mayoría de las centrales sindicales. No hace falta estar en posesión de ninguna técnica especial, de ningún título de economista, para saber que no hay nada más cierto en nuestra realidad social: el nuevo salario mínimo es insuficiente. Mientras tanto, a los empresarios les parece excesivo: no en tanto que salario, sino por la elevación en cadena que supone de sus gastos de personal. Temen que no lo puedan soportar en sus circunstancias actuales. Podría decirse que, con mucha sencillez y mucho esquematismo, la clave de la circunstancia económica, social y por lo tanto política de este país está en este choque de intereses. O de necesidades. Se viene viendo, desde hace ya más de un año, que el Gobierno no puede contener esa situación; ni la contienen los distintos partidos políticos, ni las mismas centrales sindicales. Los empresarios tienden a formar un grupo de presión por sí mismos, con sus dirigentes, sus medios de opinión, sus reuniones continuas, sus conferencias, sus actos colectivos. En cuanto a los asalariados, presionan sobre sus respectivas centrales sindicales, las desbordan y, en muchas empresas, negocian o abren conflictos desoyendo a los delegados sindicales. Los cuadros típicos de la democracia están resultando insuficientes. Les va faltando poder de convicción. Es indudable que lo que tienen que representar estos cuadros clásicos en una situación como ésta, que no es excesivamente original y que en otros países se ha producido con bastante parecido en diversos momentos de su historia, o se está produciendo, es una

capacidad moderadora y una explicación suficiente de la necesidad que hay, en los dos extremos de la tirantez social, de conseguir una limitación en sus ambiciones, para evitar una guerra social. No es difícil de conseguir cuando empresarios y obreros tienen un margen de concesión. Cuando se trata de reducir márgenes de beneficios o de limitar gastos superfluos. Puede producirse alguna dificultad psicológica si se procede de épocas de abundancia, real o aparente. Pero cuando esos márgenes de beneficios o de exceso de gastos superfluos han dejado de existir hace mucho tiempo, y lo que consideran el capital por una parte y el trabajo por otra, es una cuestión de supervivencia, cuando unos rozan la quiebra o el cierre inevitable y otros alguna forma de miseria y de hambre más o menos atenuada, la medicación es prácticamente imposible. La urgencia causa una especie de pavor, y el miedo es la mejor fuente del odio. Los mediadores no son escuchados y pierden credibilidad, aunque sus razones y sus explicaciones tengan toda la sensatez del mundo.

PROBABLEMENTE el error de la política formulada por el Gobierno hace más de un año, cuando brillaban las teorías del profesor Fuentes Quintana, fue la de no tener en cuenta el verdadero fondo de la situación de las fuerzas sociales —capital y trabajo— a las que apelaba para una mayor austeridad pública y privada. El intento loable de los pactos de la Moncloa como el de su renovación actual, a partir de lo que más o menos cómicamente se ha llamado "jornada de reflexión" y lo que deben ser los pactos sociales viene

condicionado por esa situación de urgencia. Y el tiempo transcurrido desde que se enunció una nueva política económica no ha aliviado la situación. Podría esgrimirse que hubiese sido aún peor con otra política cualquiera, pero la realidad es que eso nadie lo sabe. Lo que se sabe es que a pesar de ciertos gritos de triunfo, del buen año turístico, de la mejora en la balanza de pagos o de la conciencia con que los ciudadanos han acudido a la cita fiscal, la crisis está abarcando todos los sectores. Lo cual quiere decir que en una medida u otra está abarcando a todos los ciudadanos de todas las clases sociales. Los precios no cesan de subir en todos los sectores, incluyendo el de la alimentación, pese a todos los anuncios que se hacen en sentido contrario —no olvidemos la famosa campaña del "precio estable", cuyos carteles siguen figurando sobre mercancías que han encarecido notablemente desde el inicio de la campaña—, y suben en contra del mismo deseo de los empresarios que los elevan —porque saben que el descenso de ventas es inevitable— y los salarios no los alcanzan. Mientras, el paro obrero no cesa. Si los alcanzaran, los precios volverían, naturalmente, a subir, puesto que serían tocados por el nuevo costo de la mano de obra. El Gobierno, quiera o no, tiene que acudir en socorro de los sectores más desvalidos, para evitar que se hundan, lo cual no sólo contradice su política básica de libertad de mercados, sino que aumenta el gasto público, y tiene que acudir de nuevo a la presión fiscal, que a su vez agrava la situación de entidades y personas alcanzadas por la crisis. Es un círculo vicioso clásico. No hay más que una cantidad de dinero —si no se quiere acudir abusivamente a la máquina de fabri-





Parece que asalariados y empresarios han llegado a unas conclusiones de mal menor, dada la imposibilidad de un cambio radical de sistema económico. En la foto, empresarios, dirigentes sindicales y ministros, en la "jornada de reflexión".

carlo, lo cual a su vez no consigue más que aumentar la inflación—, y por muchas vueltas que se le dé a ese dinero, no cubre la necesidad de la totalidad nacional.

SE piensa, entonces, en las condiciones que producen esta situación para tratar de atajarlas. Se habla de que la productividad es baja y de que nuestros productos no son competitivos con los extranjeros. Se buscan culpables, que es una gran afición nacional. Los culpables, dicen los patronos, son los obreros: su gran absentismo del trabajo, su escasa formación profesional, su baja productividad. En otros tiempos se decía que el español era vago, perezoso; ya no hay quien se atreva a emplear —públicamente— estas palabras. El obrero, a su vez, aduce algunos casos prácticos: cuando se le lleva a trabajar a las fábricas alemanas o francesas, es un obrero ejemplar. Cuando comenzó la inmigración laboral española en Francia, en las fábricas Renault o Citroën, los sindicatos tenían que contener a los obreros españoles porque trabajan y producen más de lo previsto en los baremos sindicales; les explicaban que las tablas de producción personal y el número de obreros en plantilla eran fruto de un continuo progreso sindical para limitar no sólo el número de horas de trabajo, sino el del esfuerzo personal, y para evitar el paro. Sabían perfectamente los patronos que menos obreros podían hacer más trabajo en menos horas, pero el equilibrio del trabajo no esclavista estaba conseguido así. ¿Por qué el obrero español produce menos en España? Para el empresario, es consecuencia de las leyes proteccionistas —prohibición de despido libre— del Estado franquista; para el obrero, esto se produce porque los salarios siguen siendo bajos. Naturalmente, la guerra de clases existe en todo el mundo: se atenuó notablemente en las épocas de abundancia, reaparece ahora en esta época de crisis. En España se agudiza de una manera con-

siderable. Se está presentando ya en forma de odio.

LAS condiciones históricas de la situación son fácilmente hallables en la época anterior. El proteccionismo elemental al obrero por la imposibilidad del despido —que no alcanzaba sólo al obrero, sino a los cuadros medios y altos, a los técnicos— estaba doblada de una presión de las reivindicaciones y las huelgas por medio del "orden público" y de las detenciones y encarcelamiento con sentencia de los dirigentes sindicales —el canto del cisne de esa política fue el famoso proceso "mil uno"—; los salarios bajos forzaron la entrada de capitales extranjeros, y las seguridades o el proteccionismo a las empresas, a las reinversiones. Pero el proteccionismo a las empresas favorecía a su vez un producto mal realizado, apenas apto para el consumo interior, y a una forma de especulación financiera que ha tenido su mayor espectáculo en la construcción, pero que puede presentarse en gran parte de industrias. Los salarios de subsistencia, el pluriempleo, la protección financiera y el socorro del Estado a las empresas deficitarias, la protección aduanera y el consumismo del Estado para el producto mal terminado, las patentes adquiridas al extranjero, crearon una economía artificial. Que se estaba terminando ya; no hay que olvidar los últimos años del franquismo, en los que la desesperación patronal contra el régimen era ya considerable, y la lucha obrera desafiaba leyes y medidas de orden público.

NINGUNO de estos resabios han desaparecido todavía. Pero la entrada en una democracia de tolerancia han hecho desaparecer en parte censuras y represiones; y la obligación de entrada en concurrencia con un mundo exterior, problemas de producción. Achacar nuestra situación a la democracia es una maniobra política: quienes la sostienen, saben de so-

bra que el regreso a un régimen como el anterior, aparte de ser una fórmula irrepetible, no sería ya económicamente viable.

OTROS países europeos han atenuado la lucha de clases con una fórmula: gobiernos con etiqueta de izquierdas. Es el caso del laborismo inglés, o de la socialdemocracia alemana. Pero se trata de partidos políticos con viejo prestigio y vieja experiencia, que aún sostienen a pesar de sus concesiones. Son partidos que pueden contener a los sindicatos, y son sindicatos muy escuchados por los asalariados. Parece que asalariados y empresarios han llegado a unas conclusiones de mal menor, dada la imposibilidad de un cambio radical de sistema económico. El Gobierno actual de España no tiene estas condiciones de credibilidad, y ni siquiera es capaz de ofrecer una imagen de austeridad en sus gastos, aun con datos de los llamados hipócritas, que suponen más de escaparate —como los ministros a pie o en bicicleta, que tanto prodigan los fotógrafos de países nórdicos— que de realidad económica, pero que influyen en una psicología colectiva. La filiación, la procedencia y la tibieza de actuación de nuestros gobernantes han conseguido que los asalariados les consideren como representantes más o menos ocultos del gran capital, y los empresarios, como unos criptocomunistas o como unos demagogos.

EL tema al abrirse la temporada es éste: la lucha de clases, y aún el odio de clases, se acrecienta. El contacto de los asalariados con los partidos políticos de la izquierda y con las centrales sindicales es demasiado nuevo para estas generaciones —aunque tengan siglas y nombres históricos— como para confiar enteramente en sus pactos. Y los empresarios no se sienten representados por ningún partido político. Que dialoguen directamente, como van a hacerlo en los anunciados coloquios previos a un pacto, parece imprescindible. Pero si en el posible pacto no se llega al fondo de la cuestión, al mismo tiempo que a una superficie ya claramente emergente —situaciones humanas que atraviesan los límites de la posible resistencia—, y ese fondo de la cuestión está en una organización básica de la industria, el comercio, el trabajo y las finanzas de España, no se resolverá nada. El peligro de despeñarnos a un tercer mundo del que no nos sacaría nadie es muy visible. ■